

REPUBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

JUZGADO DOCE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD

Bogotá, D.C., febrero ocho (08) de dos mil veintiuno (2021)

REF. ACCIÓN DE TUTELA No.2020-0778 promovida por los señores TELLEZ BERNAL JOHN JAIRO, QUINTANA RINCON JOSE MELQUICEDEC, ROJAS CAPERA DANIEL ENRIQUE, GOMEZ QUITIAQUEZ JAIME ADRIAN, ANDERSON USAQUEN PERALTA, OSCAR GERMAN QUIÑONES PEÑA, CARLOS ARTURO ARIZA HERRERA, HECTOR HERNAN IGUA SANTANA, MILENA GONZALEZ DIAZ, LUIS HERNANDO GOMEZ, ALVARO GARZON HURTADO, RONALD BARU CALCETO OSORIO, LIBEMEYER BARRETO SOLER, PEDRO ACERO NUMPAQUE, RODRIGUEZ BECERRA CANDIDO ERNESTO, LUIS ALBERTO DAZA BEDOYA, WILLIAM FERNANDO SANTOS BELTRAN en contra de GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A..

1º.- Petición.-

Los señores TELLEZ BERNAL JOHN JAIRO, QUINTANA RINCON JOSE MELQUICEDEC, ROJAS CAPERA DANIEL ENRIQUE, GOMEZ QUITIAQUEZ JAIME ADRIAN, ANDERSON USAQUEN PERALTA, OSCAR GERMAN QUIÑONES PEÑA, CARLOS ARTURO ARIZA HERRERA, HECTOR HERNAN IGUA SANTANA, MILENA GONZALEZ DIAZ, LUIS HERNANDO GOMEZ, ALVARO GARZON HURTADO, RONALD BARU CALCETO OSORIO, LIBEMEYER BARRETO SOLER, PEDRO ACERO NUMPAQUE, RODRIGUEZ BECERRA CANDIDO ERNESTO, LUIS ALBERTO DAZA BEDOYA, WILLIAM FERNANDO SANTOS BELTRAN ejercitan la acción en nombre propio en contra de GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A., con el fin de que se les tutelen sus derechos fundamentales al mínimo vital y móvil, a la dignidad humana, al debido proceso y a la igualdad.

En consecuencia, solicitan se le ordene a la entidad accionada reconocer y pagar el salario básico mensual de acuerdo al contrato de trabajo firmado inicialmente y en consecuencia tener como nulo "el otro sí" firmado bajo coacción por el empleador el 30 de mayo de 2020. Así mismo, se le ordene a la accionada acatar y respetar el debido proceso en materia laboral.

2º.- Hechos.-

Refieren los accionantes, en síntesis que se permite efectuar el Despacho, que son trabajadores activos de la entidad accionada y afiliados al sindicato UTEDINAL.

Comentan que el 30 de marzo de la presente anualidad, el sindicato UTEDINAL firmó un acta extra convencional con la entidad accionada, cuyo fin era la suspensión de los contratos de trabajo y el pago de un bono no constitutivo de salario, por el tiempo del aislamiento y cierre de la industria por cuenta del COVID-19.

Indican que el 6 de mayo, la accionada con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad ordenados y con el fin de dar apertura a la producción, presentó una propuesta a la organización sindical, con el fin de ajustar los contratos de trabajo.

Narran que el 8 de mayo el presidente del sindicato, emite respuesta con unas recomendaciones y aclarando que no se modificaban los contratos de trabajo.

Informan que el 11 de mayo, la empresa accionada envía otra propuesta al sindicato y el 12 le responden que no modificarían los contratos de trabajo ya que eran de carácter individual y que las propuestas de la compañía, afectarían los ingresos de los trabajadores y sus derechos laborales.

Hacen saber que el 6 de mayo, la organización sindical firmó un acta de acuerdo final convención colectiva de trabajo, con el fin de dar fin al conflicto colectivo y en pro de ayudar a la empresa y mantener los puestos de trabajo.

Aducen que la organización sindical no llegó a ningún acuerdo, motivo por el cual la entidad accionada los amenazó con la suspensión de los contratos de trabajo, en caso de no firmar "el otro sí", motivo por el cual se vieron obligados a firmarlos, encontrándose en desacuerdo.

Alega que la accionada, ha sido beneficiaria del programa de apoyo al empleo formal PAEF, actualmente están en producción activa, pero a los afiliados al sindicato, no los llaman a laborar.

3º.- Tramite.-

Corresponde por reparto conocer de la presente acción de tutela a este Juzgado y mediante proveído de fecha diciembre dos (02) del año en curso se admite a trámite la misma y se vinculó oficiosamente al SINDICATO NACIONAL UNIÓN DE TRABAJADORES ENFERMOS Y DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, METALMECANICA, AUTOPARTES, MECANICA, SIDERURGICA, ELECTROMECHANICA DE MAQUINARIAS PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES ENSAMBLE DE CARROCERIAS A FINES Y SIMILARES "UTEDINAL".

Notificación efectuada a los entes accionados mediante correos electrónicos enviados los días miércoles 02 y jueves 03 de diciembre avante.

El SINDICATO NACIONAL UNIÓN DE TRABAJADORES ENFERMOS Y DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, METALMECANICA, AUTOPARTES, MECANICA, SIDERURGICA, ELECTROMECHANICA DE MAQUINARIAS PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES ENSAMBLE DE CARROCERIAS A FINES Y SIMILARES "UTEDINAL", indica que se configura la vulneración a los derechos fundamentales de los accionantes y su núcleo familiar.

GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A. informa en resumidas cuentas que no existe amenaza o violación a los derechos fundamentales de la parte accionante, en el sentido de que es un debate de índole legal y no constitucional, simplemente se busca obtener beneficios de carácter económicos.

Manifiesta que el debate planteado por parte de los accionantes no es de índole constitucional, en tanto es competencia de Juez Ordinario Laboral.

Narra que se acude a la acción de tutela 6 meses después de suscrito el acuerdo, que no hay prueba alguna que demuestre vicio en el consentimiento, ya que están ante un acuerdo valido legalmente y

adicionalmente los accionante no están en medio de un perjuicio irremediable.

Hace saber que el otro sí fue suscrito en el mes de mayo del presente año, lo cual desvirtúa el carácter inmediato, urgente e impostergable de la acción de tutela.

Una vez emitido el respectivo fallo el cual fue impugnado, correspondió por reparto conocer al Juzgado Cuarenta y Seis Civil del Circuito de Bogotá, donde declararon la nulidad de lo actuado a partir de la sentencia aquí emitida el 09 de diciembre de 2020, inclusive.

Motivo por el cual mediante providencia datada 3 de febrero del año en curso, se vinculó oficiosamente a ZONA FRANCA INDUSTRIAL COLMOTORES SAS – ZOFICOL SAS., a fin de que pudiese ejercer su derecho de defensa manifestándose sobre los hechos que fungen de base a la misma.

Notificación efectuada al citado ente mediante correo electrónico enviado el día miércoles 03 del mes y año en curso.

ZONA FRANCA INDUSTRIAL COLMOTORES SAS – ZOFICOL SAS, aclara que GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A. es la sociedad matriz del grupo empresarial en la que ZONA FRANCA INDUSTRIAL COLMOTORES SAS – ZOFICOL SAS, es una subordinada.

Indicó que los únicos trabajadores de esa entidad son los señores OSCAR GERMAN QUIÑONEZ PEÑA y CARLOS ARTURO ARIZA HERNANDEZ, los demás no son sus trabajadores y que la existencia de la relación laboral con estos dos trabajadores no se encuentra en discusión.

Relata que esa entidad acudió a sus dos trabajadores, con el fin de no suspender contratos de trabajo generando cero ingresos, pactando la reducción del salario ante la inexistencia de prestación personal de servicios, ofreciendo de buena fe el pago de un dinero inferior al salario ordinario mientras fuera posible la reactivación total de los trabajadores.

Manifiesta que la parte accionante pretende demeritar el enorme esfuerzo de la entidad, de conservar los contratos de trabajo de los trabajadores.

Comenta que la disminución temporal del ingreso, se pactó de manera voluntaria entre las partes, situación que fue de carácter temporal.

Alega que si los trabajadores se encuentran vinculados al otro sí desde mayo de 2020 y si realmente no estuvieran en capacidad de cubrir sus obligaciones, naturalmente habrían incluido algún tipo de soporte, por lo cual no se puede permitir que la acción de tutela se convierta en un ejercicio etéreo, en el que se mencionan cosas sin contexto, ni soporte, ni lógica.

Refiere que esa entidad no ha vulnerado ningún derecho fundamental de sus trabajadores, ya que los otros sí fueron suscritos por razones objetivas y de conocimiento por parte de los accionantes, como consecuencia del impacto de la pandemia del COVID-19.

Afirma que los accionantes son actuales trabajadores de ZONA INDUSTRIAL COLMOTORES SAS – ZOFICOL SAS, les continúan realizando los aportes a seguridad social, están recibiendo salarios, porcentajes menores por la situación actual, sin embargo reciben diferentes sumas de

dinero y de manera voluntaria suscribieron los otros sí.

Narra que los otros sí no tienen vicios del consentimiento, por tanto no es posible anularlos y el Juez de tutela no tiene la facultad para establecer como nulo un documento, pues se estaría extralimitando en sus funciones.

Relata que los accionantes pretenden evadir el principio de la autonomía de la voluntad privada, al buscar desconocer en sede de tutela las cláusulas en virtud de las cuales se obligaron en el marco del otrosí al contrato individual suscrito.

Hace saber que la tutela es improcedente, pues el asunto planteado por los accionantes, es de carácter estrictamente legal y éste no es el mecanismo para declarar inválido lo acordado.

CONSIDERACIONES

La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Nacional y reglamentada en el Decreto 2591 de 1.991, se encuentra consagrada para que toda persona por sí misma, o por quien actúe en su nombre, pueda reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o un particular.

Este mecanismo de orden residual, solamente encuentra procedencia cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, por lo que, se pone al descubierto que la intención y espíritu del constituyente fue la de introducir una figura alterna o paralela a los juicios y a los procedimientos que constituyen vía común para hacer valer los derechos cuya función se encuentra genéricamente asignada a la administración de justicia y garantizada por la Carta Política.

Es necesario, por tanto, destacar como reiteradamente lo ha expuesto la Corte Constitucional, que tanto en la norma constitucional, como en su desarrollo legislativo, el ejercicio de la citada acción está condicionado, entre otras razones, por la presentación ante el juez de una situación concreta y específica de violación o amenaza de los derechos fundamentales, cuya autoría debe ser atribuida a cualquier autoridad pública o, en ciertos eventos definidos por la ley, a sujetos particulares. Además el peticionario debe tener un interés jurídico y pedir su protección también específica, siempre en ausencia de otro medio especial de protección o excepcionalmente, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

De las pretensiones incoadas en el mecanismo constitucional en estudio, se deduce que la parte accionante cuenta con otro medio de defensa judicial diferente a la Acción de Tutela para reclamar sus derechos.

Con respecto a la negación de la acción de tutela por existir otro medio de defensa judicial, es variada la jurisprudencia constitucional atinente al tema, jurisprudencia entre la cual se destaca la No.T-1071 de 2005 con ponencia del H. Magistrado Dr. Jaime Araujo Rentería, la cual en uno de sus apartes, indicó:

"3. Carácter subsidiario de la acción de tutela. Reiteración de jurisprudencia

3.1 En múltiples oportunidades esta Corporación se ha pronunciado en relación con el carácter residual de la acción de tutela. Al respecto, ha señalado enfáticamente su improcedencia ante la existencia de otros recursos judiciales adecuados y efectivos para la protección de los derechos fundamentales, que se alegan comprometidos. Al respecto, en la sentencia T-252 de 2005, con ponencia de la Dra. Clara Inés Vargas, se lee:

La jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido de manera reiterada que la acción de tutela es un mecanismo de naturaleza subsidiaria y residual destinado a proteger los derechos fundamentales. Esa caracterización implica que si existe medio de defensa judicial a disposición del interesado, la tutela no puede ser utilizada para sustituirlo o para desplazar a los jueces ordinarios en el ejercicio de sus funciones propias. El artículo 86 de la Constitución Política es claro al señalar que la tutela no procede cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que sea utilizada como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

En efecto, si en el ordenamiento jurídico se prevé otro medio de defensa judicial para lograr la protección pretendida, la acción de tutela no puede desplazarlo, ya que no es el escenario propio para discutir cuestiones que deben ser debatidas ante los estrados de las jurisdicciones ordinarias. No obstante, la jurisprudencia ha señalado que el medio judicial de defensa ha de ser idóneo para alcanzar una protección cierta, efectiva y concreta del derecho fundamental amenazado o vulnerado, lo cual implica que tenga la aptitud suficiente para que a través de él se restablezca el derecho vulnerado o se proteja su amenaza.”

En este sentido, resulta acertado afirmar que la acción de tutela no constituye una instancia adicional en los procesos judiciales contemplados por el ordenamiento jurídico para la definición y resolución de los conflictos legales, siempre y cuando los medios de defensa previstos en su interior, mantengan el nivel de eficacia necesario para proteger los derechos fundamentales de las partes en litigio. Sobre este tema, expresó este Tribunal en la sentencia SU-961 de 1999:

“La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales.

La función de la acción de tutela está claramente definida por el artículo 86 constitucional como procedimiento que no sule a las vías judiciales ordinarias, ya que sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo la situación en la cual tiene carácter supletivo momentáneo, que es cuando aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.

En síntesis, es claro que la acción judicial en mención no fue creada para entorpecer o duplicar el funcionamiento del aparato de justicia concebido por el constituyente y desarrollado por el legislador, sino para mejorarlo,

brindando una figura complementaria que permite la protección efectiva de los derechos fundamentales ante la ausencia de otro medio jurídico idóneo a tal fin.

No obstante, la Sentencia T-143/00 dice cuando es un perjuicio irremediable y al respecto señala:

"La materialización de un perjuicio irremediable como elemento esencial para la procedencia excepcional de la acción, cuando existan vías judiciales distintas para la protección de los derechos, no se vislumbra en este caso, porque no se dan los elementos constitutivos de éste, es decir, la inminencia y gravedad del perjuicio y la urgencia e impostergabilidad de las medidas que deberían adoptarse para impedir su ocurrencia".

"Evidentemente, esta Corporación ha entendido como irremediable aquel daño que puede sufrir un bien de alta significación objetiva protegido por el orden jurídico, siempre y cuando sea inminente, grave, requiera la adopción de medidas urgentes y, por lo tanto, impostergables, y se trate de la afectación directa o indirecta de un derecho constitucional fundamental y no de otros como los subjetivos, personales, reales o de crédito y los económicos y sociales, para los que existen vías judiciales ordinarias."

Por otro lado, la sentencia T-647/03 señala la improcedencia de la tutela, cuando no existe una amenaza cierta y contundente:

"De ésta manera, si no existe una razón objetivada, fundada y claramente establecida por la que se pueda inferir que los hechos u omisiones amenazan los derechos fundamentales del tutelante, no podrá concederse el amparo solicitado. La amenaza debe ser entonces, contundente, cierta, ostensible, inminente y clara, para que la protección judicial de manera preventiva evite la realización del daño futuro. De tal forma que la acción de tutela sólo será procedente cuando se origine en hechos ciertos y reconocidos, que permitan amparar la violación actual de un derecho indiscutible".

Así mismo, la Sentencia T-010/08 reitera el concepto sobre la procedencia de la acción de tutela:

"Cierto es que en varias oportunidades la Corte Constitucional ha concedido la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar perjuicio irremediable, pero en todos estos casos se ha tratado de personas que por una u otra razón se ven colocadas en situación de vulnerabilidad evidente. En relación con lo anterior, es preciso recordar que la Corte Constitucional ha sido insistente en afirmar que para que proceda la acción de tutela como mecanismo transitorio es necesario demostrar que, en efecto, se trata de evitar un perjuicio irremediable. En esa línea de argumentación, ha dicho la Corte que se considera irremediable el perjuicio cuando "la lesión y amenaza de los derechos fundamentales invocados sea real, 'no se trata de la simple posibilidad de lesión, sino de la posibilidad de sufrir un mal irreparable y grave de manera injustificada. La amenaza requiere de un mínimo de evidencia fáctica, de suerte que sea razonable pensar en la realización del daño o menoscabo material o moral'"

En el mismo sentido la Sentencia T-192/09 se refiere a la relevancia constitucional del requisito general de subsidiariedad de la acción de tutela y al respecto dice:

"El requisito de subsidiariedad de la acción de tutela responde al carácter expansivo de la protección de los derechos fundamentales respecto de las instituciones que conforman el aparato estatal y, de manera particular, las instancias que ejercen la función pública de administración de justicia. En efecto, la exigencia de este requisito, lejos de disminuir el ámbito de exigibilidad judicial de dichos derechos, presupone que los procedimientos judiciales ordinarios son los escenarios que, por excelencia, están diseñados para garantizar su efectividad, a través de órdenes con contenido coactivo. A su vez, la subsidiariedad es corolario del principio de supremacía constitucional, el cual no sólo es aplicable al ámbito de la producción legislativa, sino que informa la actividad estatal como un todo. En ese sentido, la exigibilidad de los derechos fundamentales no es un asunto radicado en la competencia de los jueces de tutela, sino que es un presupuesto para la legitimidad, desde la perspectiva constitucional, de la actuación de las autoridades públicas y de los particulares. Esto lleva a inferir que dentro del parámetro normativo para la decisión judicial, cualquiera que sea la instancia encargada de adoptarla, los postulados constitucionales determinan la validez de la aplicación de la normatividad de rango inferior. Por ende, el principio según el cual la Carta Política es "norma de normas" conlleva como consecuencia necesaria la constitucionalización de cada una de las jurisdicciones. Así, cada una de ellas tendrá como objetivo principal la preservación de la integridad del ordenamiento jurídico en su conjunto y, de manera especial, la vigencia de los postulados constitucionales".

Ahora bien, respecto al reconocimiento de carácter económico, la Sentencia T-426/14 ha manifestado lo siguiente:

"...En la sentencia T-163 de 2007, esta Corte precisó: "De esta forma, se tiene como regla general que en materia de reconocimiento de derechos patrimoniales o legales al juez de tutela no le corresponde señalar el contenido de las decisiones que deben tomar las autoridades públicas en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, porque además de carecer de competencia para ello, por el propio mandato constitucional precitado, no cuenta con los elementos de juicio indispensables para resolver sobre los derechos por cuyo reconocimiento y efectividad se propende, siendo de esta forma excepcional la competencia del juez de tutela para entrar a hacer un estudio de fondo en un caso de estos."

En suma, la acción de tutela es un mecanismo judicial que busca exclusivamente la protección inmediata de los derechos fundamentales. Con fundamento en lo dispuesto en la Constitución Política para el efecto, así como en las normas que regulan la materia y en la jurisprudencia constitucional, en virtud del principio de subsidiariedad de la acción de tutela, ésta es improcedente para obtener la protección de derechos de rango legal, pues para este fin existen mecanismos ordinarios de defensa judicial.

Por su parte la Sentencia T-051/16 se ha pronunciado respecto del principio de inmediatez y al respecto ha dicho lo siguiente:

"Por otro lado, en lo que tiene que ver con el principio de inmediatez, es pertinente resaltar que la finalidad de la acción de tutela en comento es garantizar una protección efectiva, actual y expedita frente a la transgresión o amenaza inminente de un derecho fundamental, motivo por el cual, entre la ocurrencia de los hechos en que se funde la pretensión y la presentación de la demanda, debe haber transcurrido un lapso razonable.

En el evento en que no se cumpla con el requisito de inmediatez, se puede causar inseguridad jurídica frente a situaciones ya consolidadas en el orden administrativo y/o judicial, con lo que, a su vez, se puede afectar a terceros sobre los cuales recaiga la decisión e incluso el juez constitucional podría estar acolitando una conducta negligente de los administrados[11] que no comparecieron al proceso correspondiente, no presentaron los recursos procedentes ni hicieron ejercicio de los medios de control vigentes[12].

En este sentido el Tribunal Constitucional mediante Sentencia T-792 de 2009, manifestó lo siguiente:

"la jurisprudencia constitucional ha enfatizado en el hecho de que el mismo exige que la acción sea promovida de manera oportuna, esto es, dentro de un término razonable luego de la ocurrencia de los hechos que motivan la afectación o amenaza de los derechos. Esa relación de inmediatez entre la solicitud de amparo y el supuesto vulnerador de los derechos fundamentales, debe evaluarse, según ha dicho la Corte, en cada caso concreto, con plena observancia de los principios de razonabilidad y proporcionalidad".

Así las cosas, teniendo en cuenta que no es posible establecer de manera generalizada un tiempo restrictivo para el ejercicio de la acción tuitiva, en cada caso particular el juez de instancia deberá realizar un estudio que permita determinar si se cumple o no con el requisito de inmediatez. Como criterios de referencia, en la Sentencia T-194 de 2014, se establecieron los siguientes:

(i) La existencia de razones válidas para la inactividad[13](...).

(ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del accionante permanece (...). [14]

(iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en la que se encuentra el accionante (...)"[15] .

Estos criterios o las razones que motivan la procedencia de la acción de tutela, a pesar de que, en principio, no se cumpla con el requisito de inmediatez, deben ser probados sumariamente o al menos manifestados en la demanda, ya que es el accionante quien conoce las razones que le impidieron acudir antes al amparo constitucional y, pese a que ya hubiere transcurrió un término

considerable desde la ocurrencia de los hechos, requiere una protección judicial urgente.

Por otra parte, cuando una tutela se presenta porque el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial[16], se considera pertinente, de cara al requisito de inmediatez, tener en cuenta (i) la fecha en que se profirió el acto administrativo, (ii) la fecha en que se tuvo conocimiento del mismo y (iii) las actuaciones desplegadas por la parte actora desde ese momento.

Finalmente, de lo anterior se desprende que con el requisito de inmediatez, se busca evitar que la acción de tutela instaurada contra actos administrativos, sea empleada para subsanar la negligencia en que incurrieran los administrados para la protección de sus derechos. Por otro lado, se constituye como una garantía de la seguridad jurídica que se deriva de los actos administrativos[17], por medio de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas.

Se reitera que la acción de tutela ha sido instituida por el Constituyente como un mecanismo de defensa judicial al cual pueden acudir las personas cuando consideren vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales ya sea por la acción u omisión de una autoridad pública o por particulares, éstos en los precisos términos señalados en la ley. Por consiguiente, la persona que considere se le ha desconocido un derecho fundamental, puede acudir ante los jueces con el fin de obtener, a través de un procedimiento preferente y sumario, una orden destinada a que el infractor del ordenamiento constitucional actúe o se abstenga de hacerlo y así lograr el restablecimiento de sus derechos.

En esa medida, para que el juez de tutela ordene el amparo de los derechos fundamentales de una persona, se requiere demostrar o acreditar la amenaza o vulneración de estos. Por manera que si dentro del plenario no se revela ese desconocimiento, se impone la denegación de la tutela.

Reitera el juzgado que la acción de Tutela, está instituida para proteger derechos fundamentales constitucionales y lo que aquí se pretende no es de la competencia del juez constitucional, sino que lo es de la jurisdicción laboral ordinaria, lo que implica que la misma se hace improcedente al tenor de lo impuesto en el Art. 2do del Decreto 306 de 1992.

Por ende, los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional, que permitan la viabilidad de la protección tutelar invocada, no se dan, como quiera que, además de que no nos encontramos ante un perjuicio irremediable, como tampoco se demostró la vulneración de derecho fundamental alguno a la parte accionante, los mismos cuentan con otro medio de defensa judicial distinto al presente para reclamar la protección de los derechos fundamentales que consideran le fueron violentados. Adicionalmente, la acción de tutela no procede para el reconocimiento de prestaciones económicas y de igual manera, tampoco se cumplió con el requisito de inmediatez, en tanto los hechos alegados acaecieron alrededor de 9 meses, sin demostrarse la afectación a su mínimo vital.

Así las cosas, se denegará la presente acción de tutela y así se dispondrá en la parte pertinente.

En mérito de lo expuesto, EL JUZGADO DOCE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D. C., ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR la ACCION DE TUTELA instaurada por los señores TELLEZ BERNAL JOHN JAIRO, QUINTANA RINCON JOSE MELQUICEDEC, ROJAS CAPERA DANIEL ENRIQUE, GOMEZ QUITIAQUEZ JAIME ADRIAN, ANDERSON USAQUEN PERALTA, OSCAR GERMAN QUIÑONES PEÑA, CARLOS ARTURO ARIZA HERRERA, HECTOR HERNAN IGUA SANTANA, MILENA GONZALEZ DIAZ, LUIS HERNANDO GOMEZ, ALVARO GARZON HURTADO, RONALD BARU CALCETO OSORIO, LIBEMEYER BARRETO SOLER, PEDRO ACERO NUMPAQUE, RODRIGUEZ BECERRA CANDIDO ERNESTO, LUIS ALBERTO DAZA BEDOYA, WILLIAM FERNANDO SANTOS BELTRAN en contra de GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A. y vinculada ZONA FRANCA INDUSTRIAL COLMOTORES SAS – ZOFICOL SAS., por las razones expuestas en la parte considerativa del presente fallo.

SEGUNDO: Contra la presente decisión procederá la impugnación por la vía jerárquica dentro de los tres (3) días siguientes al de su notificación. (Art.31 Decreto 2591 de 1.991).

TERCERO: Notifíquese la presente decisión a los intervinientes, por el medio más expedito.

CUARTO: Sí este fallo no fuere impugnado, transcurrido el término respectivo y en la oportunidad de que da cuenta el inciso segundo del Art.31 ejusdem, ENVÍESE EL EXPEDIENTE A LA CORTE CONSTITUCIONAL PARA SU EVENTUAL REVISION, PREVIA LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS.

QUINTO: De igual manera, proceda la secretaria a incluir la presente providencia en el Portal Web de la Rama Judicial - Estados Electrónicos.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



FRANCISCO ÁLVAREZ CORTÉS
Juez

Se les hace saber a las partes, que por la coyuntura de emergencia y para efecto del pleno ejercicio del debido proceso, en caso se querer impugnar la anterior decisión, la misma deberá ser enviada al correo institucional del juzgado (cmpl12bt@cendoj.ramajudicial.gov.co)